ningún interesado en el tema, que encontrará datos y puntos de vista sobre un asunto medular de la justicia en España, que exige una permanente atención por parte de la doctrina y de los operadores jurídicos.

Javier OLIVÁN DEL CACHO

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.17>

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki:
Derecho Público en Euskal Herria, Editorial IVAP/Lete, Bilbao, 2017, 484 págs.

«Euskal Herria» hace referencia a la nación cultural localizada en un territorio que políticamente forma parte de los Estados español y francés, y dividida en tres formas de organización político-administrativa: la Comunidad Autónoma del País Vasco; la Comunidad Foral de Navarra —comunidades autónomas que constituyen los territorios vascos del Sur o Hegoalde—; y los territorios vascos del Norte o Iparralde (Zube-roa, Baja Navarra y Lapurdi), que a su vez no tienen una estructura administrativa propia y forman parte del Departamento de los Pirineos-Atlánticos y de la Región de Nouvelle-Aquitaine.

Es éste un término al cual se ha prestado poca atención desde la disciplina jurídica. Ello no obstante, en este libro editado también en euskara (*Zuzenbide Publikoa Euskal Herrian*), el Catedrático de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster se aventura a estudiar el Derecho Público en este ámbito territorial, aprovechando para fijarse

en Euskal Herria como hecho político, más allá de hecho cultural, si bien lo hace sin caer en planteamientos utópicos, de ahí que, en consonancia con la falta de reconocimiento de dicho sujeto político, la obra se titule «en Euskal Herria» y no «de Euskal Herria».

En la presentación, el autor manifiesta su propósito de «analizar las categorías jurídicas que desde el Derecho público sirven para estudiar la situación política-administrativa de Euskal Herria». Partiendo de que la identidad política requiere de unas categorías jurídicas que la sustenten o fundamenten, el trabajo reflexiona sobre los componentes jurídicos fundamentales y universales de las naciones sin Estado (como por ejemplo el territorio, la ciudadanía o el derecho de autodeterminación), a la par que intenta contextualizarlos en la realidad jurídica de Euskal Herria a través de la explicación de su historia político-administrativa, de las instituciones políticas vascas, de los derechos históricos, del régimen jurídico del euskara, del sistema de distribución de competencias y las relaciones con el Estado, y de las relaciones entre los diferentes territorios vascos.

El libro se compone de una presentación y de cuatro capítulos que abordan sucesivamente los siguientes temas: *la historia y el derecho en Euskal Herria; las categorías jurídico-políticas fundamentales; el parlamento, el gobierno y el poder judicial; y el régimen jurídico de las competencias de las relaciones entre los diferentes territorios de Euskal Herria*.

A modo de introducción, el primer capítulo realiza un recorrido por la historia político-constitucional de Euskal Herria —completado con los documentos históricos normativos que figuran a modo de Anexos—. Se recalca el hecho histórico de que durante el Reino de Navarra hasta su conquista por Castilla en 1512, los territorios vascos tuvieron una unidad como identidad política. Posteriormente, el constitucionalismo liberal de los Estados español y francés supuso la confrontación con la foralidad de los territorios vascos. En la Segunda República, Euskadi llegó a gozar de un Estatuto de Autonomía propio, pero tras la Guerra Civil Española, durante el franquismo sufrió los intentos de eliminación de su identidad cultural como pueblo. En la transición, se aprueba la Constitución de 1978 y la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra realizaron su proceso estatutario. Considerando agotado el Estatuto de Autonomía de 1979 e intentando avanzar en la autonomía, hubo dos iniciativas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que fueron frenadas por los poderes públicos españoles: «La Propuesta de un Nuevo Estatuto Político de Libre Asociación con el Estado Español» y la Ley 9/2008 de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco. En cuanto a Iparralde o País Vasco Norte, se menciona su reciente institucionalización a través de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco-Iparralde, la cual ha iniciado su funcionamiento el 1 de enero de 2017.

A lo largo de la exposición de los episodios autonómicos más cercanos en el tiempo, el autor pone de mani-

fiesto el anclaje del constitucionalismo y el inmovilismo político del gobierno central español, criticando la debilidad de los argumentos del Tribunal Constitucional para negar la legitimidad y legalidad de las propuestas de autodeterminación, a la vez que adereza y enriquece la argumentación con su concepción sobre el valor fundamental de la democracia, en el sentido de que principios y valores como el derecho a la autodeterminación deben poder considerarse para revisar las normas reguladoras constitucionales en un sistema con calidad democrática, tal y como ha ocurrido en otros Estados donde sí hay lugar a las negociaciones o referéndums. El capítulo se cierra con un *desideratum* de que la realidad cultural histórica de Euskal Herria pueda determinarse como sujeto político.

En esta línea, las ideas esenciales se recogen en el segundo capítulo donde aborda una selección de categorías jurídicas básicas de Derecho político constitucional que dan legitimidad al reconocimiento de una nación política y las enlaza con las características de los derechos públicos vascos (Así, el territorio, la democracia, el derecho a decidir, los derechos históricos, el derecho de autodeterminación, el régimen jurídico de la lengua y los símbolos). En general, la teoría de dichas categorías ha girado en torno a los Estados de Derecho existentes y no ha sido utilizado para definir el estatus de los pueblos sin Estado. En cambio, el autor las analiza desde los fundamentos de los poderes y caracteres de que disponen las instituciones públicas vascas, es decir, los Estatutos de Autonomía;

el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones expresado en la Constitución española; la reintegración foral a través de los derechos históricos y la interpretación del Tribunal Constitucional; el derecho a decidir en los Estados plurinacionales con expresa mención del caso de Quebec; y el derecho de autodeterminación referido en el Derecho Internacional. Tras examinar el concepto jurídico de territorio en sus diferentes acepciones teóricas, se detiene en el estudio de la ciudadanía, considerando que la titularidad de derechos además de a la nacionalidad, puede perfectamente vincularse a la tenencia de la condición política de vasco. Por ello, critica la utilización excesiva por parte del Estado del título competencial de igualdad del art. 149.1.1 CE para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos, cuando se debe atender ponderadamente al principio de autonomía. Otro apartado importante de este capítulo se refiere al régimen jurídico de la lengua, ya que el derecho de uso del propio idioma es una cuestión de derecho, y expone como se trata el régimen de oficialidad del euskara en la CAPV, Navarra e Iparralde en las normativas respectivas.

El capítulo tercero tiene la estructura más clásica y un carácter más descriptivo de manual al analizar las instituciones políticas vascas, principalmente las correspondientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en concreto el Parlamento, el Gobierno, el poder judicial, la Comisión Arbitral, el Ararteko y otros órganos destacados de la organización políti-

co administrativa como el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Comptos navarra o la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo de Navarra.

El capítulo cuarto en su sección primera hace referencia al sistema de distribución de competencias. Partiendo desde los modelos teóricos, se detalla la opción elegida por la Constitución de 1978, la cual contempla el principio dispositivo a favor de las Comunidades Autónomas para asumir competencias a través de sus Estatutos de Autonomía, y las diversas alternativas de modificación extraestatutaria de competencias, con atención especial, a las derivadas de la actualización de los derechos históricos. A continuación, aborda la cuestión de cómo determinar las materias que constituyen el fundamento de la asunción de competencias, las diferentes categorías de competencias, y concluye señalando que la casuística de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha favorecido la recentralización de las competencias a favor del legislador estatal (Citando la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como máxima referencia). Otra de las cuestiones generosamente desarrollada es la relación entre las normas estatales y autonómicas que debe apoyarse en el principio de competencia, y no en una concepción distorsionada del principio de supletoriedad y de prevalencia.

La segunda sección de este capítulo incide en las relaciones entre los diferentes territorios de Euskal Herria, tanto entre las Comunidades Autónomas —viniendo a señalar que

en la práctica las relaciones de cooperación entre Euskadi y Navarra han estado mediatizadas por el poder político gobernante en Navarra—, como entre Hegoalde e Iparralde.

En la esfera de las relaciones internacionales, de una inicial negativa a reconocer competencias, se pasa a un lento reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de la intervención autonómica con proyección exterior en ejecución de competencias que le corresponden. Se expresan los diferentes instrumentos jurídicos existentes de actividad internacional: convenios exteriores, asociacionismo en el ámbito internacional, acuerdos bilaterales, o la cooperación al desarrollo. Destaca el examen de las relaciones de cooperación Hegoalde-Iparralde, bien mediante los instrumentos generales de relaciones internacionales, bien mediante los instrumentos de cooperación transfronteriza, sobre todo, en el marco del Convenio Marco de Cooperación Transfronteriza del Consejo de Europa, ya que de conformidad con ello, se firmó el Tratado de Bayona que ha permitido a las entidades territoriales firmar convenios de cooperación transfronteriza entre ellas. Con ello resume el contenido de otra de sus obras recientes, aunque menor: «La Cooperación Transfronteriza en Europa. Una mirada desde Euskal Herria», publicada en 2016 por IVAP. Para finalizar, relaciona las formas de participación limitada de los entes subestatales en el seno de la Unión Europea.

En último término, se trata de una obra de alto nivel jurídico que viene

a ocupar un espacio en el Derecho que hasta ahora estaba huérfano de bibliografía. Con una cuidada transmisión de conocimientos históricos y objetivos y una adecuada selección de contenidos (En este sentido, algunas ideas incluidas en las notas de pie de página se me antojan fundamentales), se informa y forma al lector sobre cuestiones relativas a la configuración político-institucional del territorio vasco y promueve la comprensión de discursos sobre la idea de un ámbito identitario en Euskal Herria. Si se me permite expresar una observación, echaría en falta una mayor explicación del marco jurídico correspondiente a la distribución competencial en el lado del Estado francés, y hubiese sido interesante un relato más amplio sobre los movimientos de reivindicación de Iparralde de un estatus político-administrativo propio y sobre la historia de su institucionalización.

El Catedrático combina un sólido enfoque teórico con el análisis de diversos problemas jurídicos que han trascendido a la realidad vasca. En las partes más vivas de la obra, se muestran debates judiciales, ilustrativos en su opinión de una politización de la justicia así como de una judicialización de la política que tienen como fin la negación de un sujeto político sin ni siquiera permitir la apertura de nuevas formas de unidad político-administrativa.

A lo largo de toda la obra, se percibe esta preocupación del autor, advertida por el mismo en su presentación, que no es otra que identificar las posibilidades que ofrece el ordena-

miento en vigor para llevar adelante políticas que defiendan una identidad política. En cierto modo, sus últimos trabajos de investigación siguen esta línea de tocar las puertas para abrir alguna vía que dé trascendencia jurídica a Euskal Herria como hecho o sujeto político. Con todo, su declaración de intenciones no se materializa con una puesta en directo como pintor de brocha gorda, sino más bien mediante puntuales pinceladas impresionistas. La temática se aborda a modo de manual de Derecho Público, y aunque alguno pueda discutir su acierto metodológico o pueda requerir más ejemplos procedentes del Derecho comparado internacional, si se encajan bien todas las piezas, el lector creará el puzzle.

En definitiva, desde su claridad realiza una valiosa aportación para los operadores del Derecho Político Constitucional, y la sensación que transmite es que constituye una propuesta de viaje que invita a más expertos jurídicos a unirse al debate sobre interrogantes latentes. Además, el valor de las aportaciones contenidas se hace mayor justamente en el contexto actual de las reflexiones planteadas sobre el futuro de la Unión Europea, del proceso independentista de Cataluña, y de las oportunidades de actuación y cooperación en Euskal Herria con la nueva Aglomeración del País Vasco francés. El devenir de los próximos eventos determinará si es éste un legado definitivo de su autor o se sienta obligado a prometer volver al estilo MacArthur.

Iñaki SERRANO LASA

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.18>

LÓPEZ RAMÓN, Fernando (coordinador): *El patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica*. Ed. Instituto Nacional de Administración Pública, 2017.

Estamos ante un libro que integra los trabajos del proyecto de investigación sobre el régimen jurídico del patrimonio cultural en Europa y Latinoamérica desarrollado durante el año 2016 por la Red Internacional de Bienes Públicos y que generó una serie de ponencias defendidas en la reunión de Bogotá (Colombia), del 15 al 17 de junio de 2016.

Como explica el coordinador, la citada red es una agrupación de equipos de investigación de universidades e instituciones académicas de Europa y Latinoamérica que abordan habitualmente el régimen jurídico de los bienes públicos a través de actividades de investigación, docencia y extensión.

En el momento de la publicación, han participado en dicha red equipos procedentes de los países que enumeramos a continuación, con los representantes y ponencias que también detallamos.

De España, F. López Ramón («Fuentes y concepto del patrimonio cultural en el ordenamiento español»); J.L. Bermejo Latre («La indeterminación y amplitud del concepto de expolio del patrimonio cultural español»); y C. de Guerrero Manso («La escasa y problemática regulación del patrimonio inmaterial en España»).